

Título: La violencia, mía, tuya, nuestra

Autor: Guibourg, Ricardo A.

Publicado en: LA LEY 21/12/2016, 21/12/2016, 1

Cita Online: AR/DOC/3531/2016

La violencia está de moda. Los diarios y la televisión hablan de ella y la muestran incansablemente. Las personas ya no se quejan por el aumento de los delitos, sino por el incremento de la violencia con la que se cometen: "te matan por cinco pesos", dicen, atemorizadas, como si matar a uno por mil pesos, o por un millón, estuviera más justificado. Los cerrajeros y las agencias privadas de seguridad hacen su agosto, mientras la policía estatal concita desconfianza. Los que pueden viven en barrios cerrados y vigilados, donde se cocinan en su propio temor y esperan no ser asaltados sino por sus vecinos. Los que no pueden, tratan de pensar en otra cosa hasta que les toque el papel de víctimas o el de victimarios. La gente quiere seguridad, además de trabajo, y no desdén buscarla por mano propia. Y muchos, demasiados, están — como de costumbre — dispuestos a soportar una buena dosis de corrupción y de autoritarismo con tal de obtener algo de lo que ambicionan.

En este aspecto, el panorama actual nos parece catastrófico. Pero ¿qué decir del pasado? En la antigüedad, los conquistadores se ufanaban de haber pasado a cuchillo a ciudades enteras. Durante las guerras de religión, destinadas a erradicar la herejía mediante el sencillo expediente de matar a los herejes, un general preguntó a un obispo cómo haría, durante la masacre, para distinguir a justos de pecadores. "Mátelos a todos — fue la respuesta — Dios sabrá quiénes son los suyos". Los piratas berberiscos lucraban impidiendo el comercio en el Mediterráneo y exigiendo rescate por sus cautivos. Las civilizadas naciones europeas obtenían ganancias del tráfico de esclavos africanos. En nuestro siglo, los turcos mataron a cuantos armenios pudieron encontrar. Stalin, a millones de supuestos disidentes. Hitler, a millones de representantes de supuestas razas inferiores. Truman volatilizó a más de cien mil civiles en Hiroshima y Nagasaki. Francia usó la tortura en Argelia. Johnson quemó con napalm a miles de vietnamitas. Pol Pot diezmó a la población de Camboya. En América del Sur, el terrorismo de Estado inventó la siniestra técnica de la desaparición, que negaba información sobre secuestros, torturas, humillaciones y asesinatos en masa. Y, en la Argentina democrática, personas con una historia de violencia acabaron ocupando cargos electivos, el Estado en su conjunto ha sido públicamente sospechado de complicidad en la comisión de actos terroristas y antisemitas y la posibilidad de "meter bala" a los delincuentes abandonó el secreto de los escuadrones de la muerte para convertirse, en algún momento, en argumento electoral.

La violencia, en efecto, parece haber acompañado a la humanidad en toda su trayectoria; y no es de extrañar, si se tiene en cuenta que la confrontación física es una constante de las especies animales, al menos desde los insectos hacia arriba en la escala de la evolución biológica. Cuando todos los demás métodos fracasan, la violencia permanece como ultima ratio de la supervivencia (o de lo que, con mayor o menor plausibilidad, cada individuo o cada grupo entienda como su propia supervivencia).

Si la violencia es un atributo genéticamente determinado, al que es utópico renunciar en términos absolutos, su prevención ha de consistir en fortalecer los filtros que cada individuo o cada grupo esté dispuesto a trasponer antes de recurrir al remedio desesperado. Estos filtros son ideológicos, institucionales o ambas cosas a la vez. Sin pretender con esto una clasificación que sirva para otros fines más amplios, distinguiré esos filtros como humanitarios o normativos.

El filtro humanitario es el que condena la violencia en todas sus formas, abomina de la guerra y parte del mandato de amar y ayudar al prójimo en toda circunstancia, con independencia de la actitud de ese prójimo. Este filtro ha sido notablemente ineficaz a lo largo de la historia, lo que contribuye en cierta medida a su atractivo ideológico. Entre las raíces de su ineficacia se cuenta, desde luego, su conflicto con las pasiones humanas. Pero también se cuenta su carácter contradictorio: salvo en casos muy contados, como el de Gandhi, el humanitarista odia la violencia pero está dispuesto a resistir la violencia ajena mediante la violencia propia, lo que desplaza el problema de la violencia misma a la justificación de la violencia. La defensa propia y el concepto de "guerra justa" dan lugar así a un continuo de justificación donde el límite moral de la violencia tiende a ajustarse a las preferencias del observador. Esta característica contribuye, desde luego, al abuso insincero del filtro humanitario: la violencia de mis adversarios es simplemente violencia y como tal debe ser combatida y erradicada, pero la de mis amigos constituye una reacción necesaria a otro tipo de violencia (dentro de la que se incluye a menudo la injusticia, tal como nosotros la concebíamos) y merece todo nuestro apoyo hasta que la última resistencia haya sido vencida.

A su vez, los filtros normativos, morales y jurídicos, no intentan suprimir la violencia sino establecer, con mejor o peor fortuna, quiénes pueden ejercerla, en qué casos, con qué límites y con sujeción a qué garantías. Ellos son el sustento del Estado, institución que monopoliza el uso de la fuerza (o la facultad de autorizar su ejercicio), a la vez que promete a los particulares ejercerla a su favor cuando ello sea necesario, de acuerdo con

ciertas reglas que se proclaman como ley de la comunidad. El sistema es apropiado para reducir el uso de la violencia, aunque su establecimiento no garantiza el buen éxito de ese propósito ni la justicia que pueda atribuirse a las soluciones concretas. El monopolio de la fuerza requiere acatamiento por parte de los particulares, y ese acatamiento no puede, en la práctica, ser impuesto a su vez por el temor durante un tiempo prolongado. Los individuos acatan autónomamente el monopolio estatal de la violencia mientras conservan la esperanza de un trato equitativo, en el que la acción monopólica se ejerza hoy por ti y mañana (tal vez) por mí. Si esta esperanza se pierde, el sistema queda huérfano de legitimidad y de confiabilidad e inicia el camino hacia la anarquía.

Cuando de hablo de anarquía, no me refiero específicamente a una forma de organización (o desorganización) política ni a la ausencia de un gobierno central: aludo a la mayor o menor incapacidad de las instituciones para mantener en la práctica el monopolio de la violencia y, por lo tanto, para garantizar el cumplimiento de las normas que ellas mismas hayan creído conveniente establecer. En la medida en que las normas tiendan a la ineficacia, los particulares asumen o reasumen mayor autonomía en la decisión de sus conductas y, consecuentemente, se vuelven más proclives — ante el eventual fracaso de otros métodos — a ejercer la violencia individual o grupal para asegurar sus propios objetivos.

No es un secreto que los sistemas normativos jurídico y moral están en crisis en este aspecto. La policía es impotente para prevenir aceptablemente el delito (y a veces sus miembros contribuyen activamente a incrementarlo); los actos ilícitos que se denuncian son apenas una fracción de los que se cometen; los que se investigan y juzgan son una fracción de los que se denuncian y los que terminan en condena una fracción de los que se juzgan. Los ciudadanos no confían en la policía ni en los jueces; descreen de los legisladores y depositan en el Poder Ejecutivo sólo algunas esperanzas muy genéricas; rechazan la moral pacata que todavía se predica, pero no han llegado a constituir un nuevo sistema ético dotado de algún consenso. La buena fe es objeto de sospecha y el patriotismo un indicio probable de corrupción.

El estado de cosas que acabo de describir no es sólo de aquí ni de ahora; pero hay que reconocer que los últimos años de nuestro país constituyen un ejemplo muy claro de la descomposición normativa. En estas circunstancias, es natural que la violencia aflore.

De acuerdo con las circunstancias históricas e internacionales, hubo un momento en el que la violencia se concebía ante todo en términos políticos. Los grupos armados confiaban en ella para impulsar una revolución que instituyera un hipotético paraíso igualitario. El terrorismo de estado (es decir, otro grupo armado institucionalizado) recurría a la violencia para mantener o aun profundizar las desigualdades. Ese baño de sangre terminó, pero los resultados están a la vista y no auguran un futuro tranquilo.

Este es, en cambio, el momento de los individuos. Cada ciudadano, casi solo en una selva hostil, es presa cada vez más fácil de la tentación violenta. Hace años, un personaje cómico de la televisión proponía reiteradamente, ante cada dificultad, "agarrar un fierro y darle, darle, darle...". Esta interpretación del inconsciente colectivo, en el ámbito global, se hallaba representada por "el increíble Hulk", ese gigante verde y colérico, producto de un hombrecillo pacífico y de su indignación. Pero más inquietantes aún son las series policiales en las que el héroe logra atrapar a los villanos gracias a la transgresión de sus propias reglas. Y no estoy criticando con esto a la televisión, ni insinuando que ella promueve la disolución de la comunidad. Por el contrario, la interpreto como una manifestación más del estado de cosas, traducido en imágenes por obra y gracia de las leyes del mercado.

Sobran, por cierto, ejemplos menos ficticios. El ingeniero Santos mató a dos jóvenes que le habían robado el pasacasetes y fue públicamente elogiado por el propio presidente de la Nación. El cajero Fendrich saqueó el tesoro de su banco y, al ser detenido, recibió aplausos y palabras de aliento de los transeúntes, que lo consideraban un héroe privado, capaz de llevar a la práctica lo que ellos no se atrevían a hacer. Las víctimas de delitos piden pena de muerte; los delincuentes describen sus propios actos como "errores" y se proclaman presos sociales; muchos desempleados usan hipotéticamente la expresión "salir a robar" para expresar una opción que, aceptada o rechazada, está a menudo presente en el ánimo desesperado. Y los comerciantes, atrincherados tras precarias rejas, reclaman mano dura.

Casi todos ellos tienen alguna parte de razón, si sus argumentos se examinan individualmente. Pero esta misma circunstancia indica que la situación es insostenible en términos colectivos.

Mientras tanto, como ajena a la polémica de los medios, la violencia doméstica sigue como desde hace siglos envenenando discretamente la vida de sus víctimas, casi siempre mujeres y niños que, aunque protegidos por la ley, se ven silenciados por las normas sociales y librados a su desventura por el mercado, que los tiene fuera de su target.

Por cierto, no estoy diciendo nada nuevo: todo el mundo conoce estas circunstancias. Pero el acuerdo acerca

de los síntomas se diluye cuando se discurre acerca de los remedios, porque cada uno propone medidas parciales, a menudo conflictivas entre sí, y la economía, que tiene otras prioridades, decide al fin y al cabo que nada se haga fuera de algunos retoques cosméticos.

En definitiva, tenemos un sistema que no funciona satisfactoriamente, pero — salvo contadas excepciones — ninguno pretende eliminarlo por completo. Es preciso, pues, reformularlo. Y para eso conviene responder descarnadamente a la primera pregunta: ¿qué queremos, qué esperamos, de los sistemas normativos? ¿Queremos paz? Es teóricamente posible suprimir la violencia mediante el temor y la estricta vigilancia; pero la opción no es práctica más allá de un tiempo extraordinariamente limitado, porque la vigilancia es costosa y tiende a corromperse, en tanto el temor sufre con el tiempo el desgaste del acostumbramiento. La represión sólo es útil, en términos duraderos, para casos excepcionales: el resto debe reposar en el acatamiento leal de las normas por los ciudadanos. Y este acatamiento requiere un estado de cosas tal que, aunque no responda exactamente a las expectativas o a los deseos de cada uno, satisfaga al menos los intereses o las esperanzas colectivos de modo suficiente para restablecer el sentido de pertenencia comunitaria por encima de las apetencias individuales inevitablemente conflictivas. Cuando ese estado de cosas adquiere cierto grado de confiabilidad, sentimos habitualmente la tentación de llamarlo justicia. Pero no pretendo introducir aquí este término porque su ambigüedad puede oscurecer el debate de las ideas.

¿Qué medidas o modificaciones podrían contribuir a la mejor eficacia del sistema? Es posible citar un buen número de ellas, que probablemente sólo actuarían en conjunto: protección del empleo, asistencia social, adcentamiento de las prácticas políticas, lucha efectiva contra la corrupción, transparencia de procedimientos y decisiones, racionalización del sistema tributario, establecimiento de criterios adecuados y efectivos para la selección y remoción de magistrados y funcionarios, fuerzas de seguridad bien pagas y mejor controladas, impulso a la salud pública y a la educación común, coherencia del Estado y de sus organismos en la aplicación de los principios proclamados y en el cumplimiento de las garantías legales y constitucionales. Pocas de estas medidas están destinadas a operar directamente sobre la violencia; pero todas ellas tienden a reconstruir la confianza de las personas en las prácticas comunitarias, con lo que su influencia indirecta sobre la paz social es más efectiva, a mediano plazo, que el aumento exasperado de las penas o la constitución de bandas armadas de vigilantes aficionados.

Cualquier acción que se emprenda, sin embargo, debería contar con una circunstancia desgraciada: que el "nuevo orden económico", popularizado hoy con el nombre de globalización, impulsa en la práctica un nuevo desorden social. No se trata ya de la desigualdad, nuestra vieja conocida, sino de la lisa y llana expulsión de una multitud de seres humanos que, ya innecesarios para la producción de bienes y servicios, quedan privados de ingresos lícitos dentro del sistema. Un proyecto que tienda a reducir la violencia tendrá que encarar algún plan para el tratamiento de este fenómeno. Por el momento, la opción que el modelo mundial acepta (a veces mediante una púdica exportación de la desigualdad) es la segregación creciente de los excluidos: la propia dinámica de la situación podría conducir por esa vía, en pocos años, a una política de exterminio. Otra alternativa, tendiente a la recuperación de los vínculos sociales y a la articulación de los grupos humanos entre sí, requeriría un gasto social que hoy suena como herejía en los oídos de cualquier inversor.

Probablemente, en resumen, la efectividad de las soluciones, tanto para la violencia actual como para la que se avecina, esté estrechamente relacionada con la amplitud de miras con la que se defina el problema. El hoy y aquí ya no da resultado: conduce al autoritarismo, a la fragmentación y, en definitiva, al empeoramiento del panorama. Tal vez un día acabemos por comprender que la paz no es una inversión de corto plazo.